

1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA, EL 22 DE NOVIEMBRE DE 1902

PRESIDENCIA DEL SEÑOR BENITO VILLANUEVA

SUMARIO: — Mensaje del poder ejecutivo pidiendo se celebre sesión extraordinaria para tomar en consideración el proyecto de ley, en revisión, sobre residencia de extranjeros en el territorio de la República.—Aprobación sobre tablas de dicho proyecto.

DIPUTADOS PRESENTES

Argañaraz, Astrada, Argerich, Balaguer, Balestra, del Barco, Barraquero, Bertrés, Bollini, Carbó, Carlés, Carreño, Castro, Centeno, Cernadas, Comaleras, Contte, Cordeiro, Coronado, Echegaray, Ferrari, Fonseca, Galiano, Garzón, Gigena, González Bonorino, Gouchon, Lacasa, Lacavera, Laferrère, Lagos, Leguizamón (G.), Leguizamón (L.), Loureyro, Luna, Luro, Martínez Ruño, Mujica, Olmos, Oroño, Padilla, Palacio, Parera, Pinedo, Posse, Quintana, Rivas, Robert, Rohlán, Romero (G. I.), Rosas, Salas, Sastre, Seguí, de la Serna, Sivilat Fernández, Silva, Soldati, Torres, Ugarriza, Varela, Varela Ortiz, Vedia, Villanueva (B.), Vivanco (P.), Vivanco (R. S.), Zavalla.

CON LICENCIA

Bores, Guevara, Pérez (E. S.).

CON AVISO

Castellanos, Silva.

SIN AVISO

Acuña, Aldao, Alfonso, Amenado, Avellaneda, Barraza, Barroetaveña, Benedit, Berrondo, Billordo, Bustamante, Campos, Capdevila, Casares, Demaria, Dantas, Domínguez, Fonrouge, Gómez, Helguera, Iriondo, Loveyra, Lucero, Luque, Martínez (J), Martínez (J. A.), Martínez (J. E.), Naón, Olivera, Orma, Ovejero, Parera Denis, Peña, Pérez (B. E.), Romero (J.), Sarmiento, Tissera, Torino, Uriburu, Urquiza, Victorica, Villanueva (J.), Yofre.

—En Buenos Aires, á 22 de noviembre de 1902, reunidos en su sala de sesiones

los señores diputados arriba anotados, con asistencia de los señores ministros del interior y de relaciones exteriores, doctores Joaquín V. González y Luis M. Drago, el señor presidente declara abierta la sesión, á las 9 y 30 p. m.

ASUNTOS ENTRADOS

RESIDENCIA DE EXTRANJEROS

Sr. Presidente—La honorable cámara ha sido convocada á esta sesión extraordinaria, de acuerdo con el artículo 32 del reglamento, á pedido del poder ejecutivo, según se verá por el mensaje que se va á leer.

—El señor secretario lee:

Buenos Aires, noviembre 22 de 1902.

Al señor presidente de la honorable cámara de diputados.

Pendiente de la sanción del honorable congreso el proyecto de ley de residencia de extranjeros, el poder ejecutivo cree necesario solicitar su consideración en la noche de hoy, en sesión extraordinaria.

Son del dominio público los sucesos que en este momento se desarrollan en esta capital y parte de la provincia de Buenos Aires, con motivo de la huelga en que se han declarado numerosos obreros de distintos gremios, que amenazan el orden público, los inte-

reses del comercio y la navegación, y por consiguiente la riqueza pública.

Dadas estas circunstancias, á fin de que el poder ejecutivo esté habilitado para tomar las medidas más eficaces que ellas reclaman, os pido la aprobación del proyecto que en sesión de esta misma fecha ha tenido sanción del honorable senado.

Dios guarde al señor presidente.

JULIO A. ROCA.

JOAQUÍN V. GONZÁLEZ.

PROYECTO DE LEY

El senado y cámara de diputados, etc.

Artículo 1.º El poder ejecutivo podrá ordenar la salida del territorio de la nación á todo extranjero que haya sido condenado ó sea perseguido por los tribunales extranjeros, por crímenes ó delitos de derecho común.

Art. 2.º El poder ejecutivo podrá ordenar la salida de todo extranjero cuya conducta comprometa la seguridad nacional ó perturbe el orden público.

Art. 3.º El poder ejecutivo podrá impedir la entrada al territorio de la República de todo extranjero cuyos antecedentes anteriores autoricen á incluirlo entre aquellos á que se refieren los dos artículos precedentes.

Art. 4.º El extranjero contra quien se haya decretado la expulsión, tendrá tres días para salir del país, pudiendo el poder ejecutivo, como medida de seguridad pública, ordenar su detención hasta el momento del embarco.

Dada en la sala de sesiones del congreso argentino, en Buenos Aires, á 22 de noviembre de 1902.

JOSÉ E. URRUTU.
Benigno Ocampo,
Secretario.

Sr. Bollini—Pido la palabra.

Siendo el asunto que motiva esta sesión bastante conocido, y necesaria en las presentes circunstancias la sanción del proyecto, hago moción para que se trate sobre tablas.

—Aprobado.

Sr. Presidente—Está en discusión la moción del señor diputado por la capital.

Sr. Lacasa—Pido la palabra.

Creo que el asunto no reviste el carácter de urgencia que tan categóricamente le atribuye el señor diputado. No es posible que la honorable cámara se ocupe sobre tablas de un proyecto que ha permanecido dos años á estudio del senado. Dos años de estudio, de reflexión no han sido bastantes en aquella honorable cámara para dictar esta ley, y sin embargo se quiere que hoy, bajo la acción de sucesos extraordinarios producidos en esta capital y en la provincia de Buenos Aires, demos una sanción de tanta trascendencia, improvisando!

Creo que la honorable cámara, para ocuparse de este proyecto, debe previamente estudiar las causas que perturbaban nuestra sociedad. No es posible sancionar sobre tablas un proyecto que va á herir de una manera profunda una gran parte de la población de nuestro país, que contribuye con su labor y con su esfuerzo al desenvolvimiento de nuestras industrias, fomentando la producción nacional.

No es posible tampoco que bajo la presión de las actuales circunstancias se dicte una ley de tanta trascendencia que va á interrumpir las corrientes de inmigración de que tanto necesita nuestro país. No es posible, de la noche á la mañana, dictar una ley que atribuye facultades tan omnímodas al poder ejecutivo, para curar un mal que no es del momento, pues se trata de una de las cuestiones más serias que preocupan á todos los países. Las huelgas, que se invocan como motivo para la sanción de esta ley, podrán requerir otras medidas, con las que el poder ejecutivo podría ejercitar su acción con más eficacia para reprimir los desórdenes á que esos movimientos dan lugar.

Es un mal hábito de nuestros poderes públicos preocuparse de resolver las cuestiones graves solamente cuando llegan á su período álgido.

Tenemos un ministerio de agricultura, al cual la ley de su creación le atribuye facultades no solamente respecto de las cuestiones que afectan á la agricultura, sino que tiene también á su cargo el estudio de las industrias, el comercio y todas las manifestaciones de la actividad humana que se relacionan con la producción del país. ¿Dónde están los estudios realizados por ese *cosmos*, como se ha llamado muy bien á ese ministerio, sobre el trabajo, los salarios y todo cuanto se relaciona con el obrero y el capital; en una palabra, sobre los factores que realizan la producción de la nación?

Yo creo que no podemos prescindir de estas cuestiones para resolver estas cosas.

Los parlamentos de todas partes del mundo que han tenido que resolver estos grandes problemas han tratado de estudiar sus causas; y creo que la cámara debe proceder también así. No se trata de uno ni de cincuenta: se trata de miles de hombres que con razón ó sin ella claman por justicia!

Y entonces, ¿cuál es la misión que le incumbe al congreso? Ir al seno del pueblo, compenetrarse con él, analizar

ese mal, ver de qué parte está la culpa: si de los obreros ó de los patrones, y dándose cuenta de lo que pasa, tratar de solucionar con equidad las dificultades surgidas, preparando una legislación para resolver las relaciones que surgen de la vida del trabajo.

Debemos hacer esto: que la cámara se constituya en sesión permanente, si es necesario, y se nombre una comisión que se acerque á esos hombres, que investigue las relaciones en que se encuentran y por qué se producen esas agitaciones tumultuarias; que se acerque á todos y estudie las causas perturbadoras de la tranquilidad y del orden, para que pueda aconsejar á la cámara las medidas que sea necesario votar. Pero mientras la honorable cámara no realice el estudio que está obligada á hacer en presencia de sucesos tan graves, no es posible que se trate un asunto tan profundo, tan grave y que puede traer consecuencias tan fatales para la sociedad.

Por estas consideraciones, me voy á oponer á que se trate sobre tablas el asunto.

—Apoyado.

Sr. Presidente—Se votará la moción del señor diputado Bollini; y si fuere rechazada, la del señor diputado por Buenos Aires.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Lacasa—Pido que se rectifique la votación.

—Se rectifica y resulta afirmativa de 50 votos contra 17.

Sr. Presidente—Está en discusión en general el proyecto.

Sr. Ministro del interior—Pido la palabra.

La atmósfera bajo la cual viene á la consideración de la cámara este asunto ha sido un tanto abultada en su importancia real, á tal punto que se ven peligros que en realidad no existen en toda la magnitud que se cree. Por eso no es raro escuchar opiniones que exigen airadas medidas más severas que las que autoriza el proyecto que hoy viene á estudio de la cámara.

No se ocultan al poder ejecutivo las medidas que debería adoptar en caso de que las huelgas que actualmente conmueven á una gran parte de esta capital y de la provincia vecina asumiesen proporciones mayores que en la actuali-

Este proyecto de ley no se propone directa y únicamente curar el mal de las huelgas.

Ellas, como muy bien se ha dicho, obedecen á causas múltiples. Hay huelgas que tienen una explicación racional en el orden de los fenómenos económicos y sociales; hay otras que son agresivas y que empiezan desde luego por atacar al orden social, al orden constitucional establecido.

El poder ejecutivo no cree que esta ley sea, pues, de un efecto inmediato, ni destinado á curar de raíz y de un golpe todos los inconvenientes que la situación actual trae consigo. La ha prestigiado, ha pedido su sanción al senado, y este honorable cuerpo la ha aprobado hace pocos momentos, en la creencia de que ella contribuirá inmediatamente á remediar una gran parte del mal que la capital presencia, y, más que todo, á evitar que ese mal se haga mayor.

No va tampoco dirigida, ni puede ir, por sus términos, contra todos los que actualmente se encuentran en huelga, sino, más bien, á proteger esos gremios conmovidos, agitados, exaltados y arrastrados, diré así, por la prédica subversiva del orden jurídico y social establecido, de ciertos agitadores conocidos, perfectamente filiados, profesionales de este oficio, que viven de esto y que son la única causa de las perturbaciones actuales, y que ponen en tanto peligro la libre circulación del comercio interno y externo de la República. (*¡Muy bien!*)

No hagamos, pues, más grave la cuestión de lo que en realidad es, ni le quitemos su gravedad real; y me parece que la honorable cámara haría acto de buen gobierno procediendo como en todas estas circunstancias proceden los cuerpos formados por hombres políticos: armado al gobierno en su rama ejecutiva, de los medios de poner eficaz y pronto remedio á la situación actual en que el conflicto está producido.

Indudablemente el poder ejecutivo no puede, al amparo de esta ley, ir á resolver el problema social de la huelga. Este problema es muy vasto, contiene múltiples cuestiones, y se rige por leyes de otro género. El poder ejecutivo tiene á estudio este problema desde hace algún tiempo; pero como es una gran cuestión social, la honorable cámara hará al poder ejecutivo el honor de creerle cuando dice que le ha dedicado toda su atención, no siendo posible tampoco re-

solverlo en un día: son las cuestiones más complicadas que puedan tratarse en el orden social.

Es, pues, esta una ley de efectos inmediatos. No puede decirse que ella sea desconocida á la honorable cámara, ni á la opinión pública ilustrada, ni al país. Hace dos años que este problema está planteado en una de las cámaras del congreso que acaba de sancionar este proyecto. Los espíritus más ilustrados lo han discutido. Esta honorable cámara se compone en su mayor parte de hombres perfectamente versados en las leyes políticas y comunes del país, y no le son desconocidas estas cuestiones, resueltas ya en esta misma forma ejecutiva, breve y eficaz, por todos los países civilizados.

En el honorable senado se ha discutido en parte este asunto, del punto de vista de nuestra constitución. Allí se citaron las opiniones de jurisconsultos y la jurisprudencia de los más altos tribunales de los Estados Unidos, donde esos problemas están resueltos en la misma forma ejecutiva que se propone.

Nuestra constitución no puede oponerse, como no se opone, á nada que sea instrumento eficaz de gobierno. Ella misma ha sido definida como un instrumento de gobierno, y en ningún caso puede ser citada como restrictiva de la acción de los poderes públicos en cuanto sea tendente á defender al país, á preservarlo contra desórdenes traidos del exterior y que están fuera de su mecanismo constitucional.

Es esta una de esas leyes que se sancionan con el criterio político de las asambleas públicas. Están perfectamente á salvo todas las garantías constitucionales que pudieran ser afectadas por su aplicación. Ha sido inspirada en el ejemplo de las naciones más cultas del mundo. En los fundamentos amplios é ilustrados con que su autor, el senador por la capital doctor Cané, la presentó al senado, están expuestos los antecedentes legislativos de otros países, y aún la jurisprudencia preestablecida de los Estados Unidos, que abonan su constitucionalidad y su perfecta justicia. Por eso el poder ejecutivo no ha tenido el menor reparo en prestarle su más decidido apoyo, sin quitarle tampoco su carácter de urgencia, desde que no hay nada perdido con que la honorable cámara celebre una sesión extraordinaria, contribuyendo, si no á curar el mal en su raíz, al menos á asumir las proporciones que á nuestro juicio harían necesaria una me-

dida más general y más extraordinaria, por lo menos á evitar que este mal sea mayor. En la aplicación de esta ley, el poder ejecutivo procederá con el espíritu de la más alta justicia, y sin tener otra mira que la tranquilidad pública, asegurar la libre circulación del comercio interior y exterior, en estos momentos en que el país, afligido por una larga crisis, tiene su vista puesta en la exportación, que le asegurará un período feliz en sus finanzas públicas. El poder ejecutivo no puede pues dudar que la honorable cámara, inspirándose en esos propósitos, y apartando quizá escrúpulos legales que sería fácil destruir en una discusión detallada, procediendo con criterio político, se apresurará á dictar esta ley, que, á su juicio, servirá en las actuales circunstancias para contener en parte el mal y evitar que tome proporciones mayores. (*Muy bien! ¡muy bien!*)

Sr. Gouchon—Pido la palabra.

Es de lamentar, señor presidente, que este proyecto de ley venga al debate en estos momentos de agitación y bajo la presión que esa misma agitación tiene que ejercer en nuestro ánimo.

El señor ministro ha manifestado que esta ley tiende en parte á curar el mal de las huelgas, si bien no espera de ella que tenga una eficacia suficiente para curarlo radicalmente.

Desde luego, las huelgas no son un mal. Las huelgas han sido la defensa legítima que ha tenido el hombre de trabajo contra el capitalista; y es debido á las huelgas, ejercitadas dentro de los límites legítimos, que la clase obrera ha mejorado su condición en todas partes del mundo, como acaba de reconocerlo en un documento público un ministro del gabinete italiano.

De manera que las huelgas no son un mal: es un medio de defensa que tiene el trabajador contra el capitalista, que á su vez cuenta con otros medios para contrarrestar la acción del obrero. El mal no está en la huelga; el mal está en que los huelguistas no se limitan á ejercitar su legítimo derecho, sino que atentan al derecho de los demás; que atentan contra la vida, contra la propiedad, y eso sucede entre nosotros porque desgraciadamente nuestro código penal no contiene prescripciones bastante severas para una represión eficaz.

Las penas deben ser proporcionadas á la alarma social, al mal social que producen los actos que se realicen.

No es lo mismo un acto por el cual una persona va y atenta contra otra, la hiere, la lastima, que cuando ese mismo acto se realiza como resultado de un plan contra el orden social, como sucede con los huelguistas, que atentan contra la vida y la propiedad para impedir el ejercicio de un derecho: el derecho de trabajar libremente en el país.

Entonces, el mal está en el vacío de nuestro código penal, y ese vacío ha podido ser llenado en el senado, que tiene á su cargo una reforma á nuestro código desde hace varios años, incluyendo un artículo como el que tienen la mayor parte de los códigos extranjeros, que aumentan la penalidad para tales casos. Fuera de esos recursos legales, la ley que se propone á nuestra aprobación, es una ley que viene á conmover al país y á desconocer las garantías constitucionales, al amparo de las cuales se radica el elemento extranjero.

La constitución no ha sido hecha exclusivamente para los argentinos; la constitución ha sido hecha, según lo establece claramente en su preámbulo para ellos y para todos los hombres del mundo que quieran habitar nuestro suelo, y ha establecido un artículo que comprende á argentinos y extranjeros, que es el 18, que dice que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. El extranjero es un habitante del país; no se puede negar. La expulsión es una pena, y esa pena ¿por quién va á ser aplicada? ¿Quién va á determinar la oportunidad de su aplicación? El poder ejecutivo de la nación. Pero el poder ejecutivo de la nación, según el artículo 95, no puede en ningún caso ejercer funciones judiciales. Conceder al presidente de la República la facultad de juzgar y de aplicar la pena, es darle una facultad extraordinaria, cuya calificación está consignada en uno de los artículos de la constitución.

Sancionada esta ley, los extranjeros establecidos en el país desde largos años, que han contribuido con su trabajo fecundo á la obra de nuestro progreso, ellos, que han llevado la población á todos los extremos de la República que han levantado nuestros emporios de comercio, que han transformado todo el país, que han luchado á la par de los argentinos en la obra material de nuestro progreso, y que cuando ha sido necesario han mezclado su sangre á la de los argentinos en los campos de batalla para

defender el honor y la bandera nacional; esos extranjeros que han venido bajo la garantía consignada en nuestra constitución, después de la sanción de esta ley quedarán fuera de su amparo, expuestos á ser juzgados, es decir, á ser expulsados del país, á ser condenados sin juicio previo.

Sr. Bollini—No van á ser expulsados los hombres de trabajo!

Sr. Gouchon—Basta que haya un solo miembro del cuerpo social cuyos derechos sean menoscabos, para que el cuerpo social se sienta ofendido por esa medida. ¡No es el número! Basta que un habitante de la República sea lesionado en su derecho, para que toda la comunidad argentina se sienta atacada por esa medida.

Además, señor presidente, me parece que esta ley no responde á un buen criterio de gobierno.

Desconocer los derechos que la constitución acuerda á todos los extranjeros, producirá una verdadera alarma en esa población laboriosa que ha colaborado con los argentinos en la obra de nuestro progreso ¿Para qué? ¿Para algo eficaz? Afirmo que esta ley será burlada inmediatamente. Bastará que un extranjero agitador haya residido dos años en nuestro país y se haga ciudadano argentino, para que pueda ser agitador en todas las formas imaginables sin que esta ley le alcance.

Sr. Luro—Para eso están las leyes del país. Ese que se haga ciudadano, no provocará reclamaciones diplomáticas. Y esa es la diferencia entre el ciudadano y el extranjero.

Sr. Vedia—Podría leer el señor diputado el artículo 25.

Sr. Gouchon—¿Qué dice el artículo 25? «El gobierno federal fomentará la inmigración europea».

Sr. Vedia—Esa es una lectura incompleta; léalo todo.

Sr. Carlés—Contéstele con la lectura del artículo 28!

Sr. Luro—Vamos á acabar por leer toda la constitución.

Sr. Carlés—Y por ver la inconstitucionalidad de esta ley.

Sr. Gouchon—El señor diputado se refiere á aquellos que todavía no son habitantes de la República, á aquellos cuya entrada se puede impedir. Pero una vez que un hombre haya llegado á ponerse bajo el amparo de nuestra bandera y de nuestras leyes, ese hombre está amparado por la constitución argentina y no se puede sino por una ley

como la que se propone, que dé facultades extraordinarias al presidente de la República, destruir las garantías fundamentales que aquélla establece.

No quiero prolongar este debate. Presumo cuál sea el resultado de la deliberación, pero he querido salvar mi voto, dejar constancia de que no concuro con él á la sanción de una ley que está en abierta contradicción con la constitución nacional; que no quiero cooperar á la sanción de una ley que es una ofensa gratuita á todo el elemento extranjero establecido en nuestro país, (*demonstraciones de desaprobación en las bancas*), y por lo mismo establece para él, de una manera permanente, las condiciones del estado de sitio. Es una ley que declara que el elemento extranjero es un elemento de anarquía! (*Demonstraciones de desaprobación en las bancas*).

Es una ley que priva á todos los extranjeros establecidos en el país de la protección de nuestros tribunales.

Sr. Bollini—No conoce la ley! (*Risas*).

Sr. Gouchon—Una ley que inviste al poder ejecutivo de facultades judiciales, que la constitución ha prohibido en absoluto que le sean conferidas.

Sr. Vivanco (P.)—Son facultades policiales.

Sr. Gouchon—Son facultades judiciales, porque el presidente de la República va á juzgar y pronunciar su fallo, sin juicio previo, sin defensa posible.

Sr. Vivanco (P.)—Son facultades policiales.

Las disposiciones policiales no pueden contrariar las garantías fundamentales de la constitución nacional.

Sr. Luro—Justamente.

Sr. Vedia—Es la misma disposición del código penal francés la que contiene el proyecto.

Sr. Gouchon—Es que se está haciendo una confusión lamentable, tomando las leyes de las naciones europeas donde los parlamentos son á la vez asambleas constituyentes...

Sr. Vedia—¿Y los Estados Unidos?

Sr. Vivanco (P.)—Pero no confunda las funciones judiciales con las policiales!

Sr. Gouchon—Allí, los parlamentos no están sujetos á una constitución, y los poderes ejecutivos tienen facultades extraordinarias, hasta la de disolver los mismos parlamentos.

Sr. Vivanco (P.)—Podemos apartarnos del

texto expreso de la constitución, y cada vez que nos apartemos de él para adoptar leyes extranjeras, nos exponemos, como ahora, á dictar leyes inconstitucionales y contrarias al verdadero progreso del país.

Además, señor presidente, no es exacto que los agitadores, en las actuales huelgas, sean exclusivamente extranjeros. Hay muchos argentinos, más inteligentes, más instruidos que los extranjeros, para promover estas agitaciones: esto lo saben todos los que siguen este movimiento huelguista. Se podrían citar los oradores: no son extranjeros, son argentinos. Entonces esta ley es completamente ineficaz en sus resultados prácticos, como influencia moral es contraria á los verdaderos intereses nacionales, y con relación á la población extranjera, como he dicho antes, constituye un verdadero agravio. (*Exclamaciones en las bancas: ¡nó! ¡nó!*)

Por estas razones, voy á votar en contra del proyecto.

Sr. Roldán—Pido la palabra.

Yo me doy cuenta, señor presidente, de las circunstancias premiosas bajo las cuales se ha realizado esta convocatoria, y aún cuando recojo las palabras del señor ministro del interior, según las cuales se habría magnificado la importancia del movimiento producido, hago el debido honor á los propósitos que inspiran el pensamiento del poder ejecutivo, respecto del cual acaba de informarnos ampliamente el señor ministro.

Soy el primero en deplorar los acontecimientos que motivan esta reunión, y el primero en condenar también la actitud del elemento huelguista, que alzándose en nombre de un derecho propio, no acierta á otra cosa que á lesionar el ageno, colocando entre él y el ideal que persigue, esa misma fuerza ciega y brutal contra la cual protesta.

Pero esto no me impide pensar que esta ley de residencia, como se la llama ahora, ó ley de extrañamiento de extranjeros, como se la ha llamado en otras partes, ha sido dictada, en los países donde está en vigencia, después de haber fracasado una prolija y copiosa legislación obrera; pero en un país como éste, donde no se ha dictado una sola palabra de legislación obrera, donde ni siquiera un simple proyecto sobre accidentes del trabajo ha merecido el honor de ser incluido en la prórroga, llegar á este extremo, me parece que es llegar al fin del camino sin haber recorrido

Noviembre 22 de 1902

una sola de las jornadas indispensables para arribar á él.

Yo participo también de los pudores constitucionales que agitan al señor diputado Gouchon, y pienso que esta ley establezca una diferencia entre el elemento nacional y el extranjero.

Releo, señor presidente, lleno de dudas, el artículo 20 de la constitución nacional: «los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano».

Sr. Ministro del interior—Hay limitaciones.

Sr. Roldán—Pienso, por otra parte, que la policía de la capital tiene, dentro de sus facultades legales, elementos de sobra para contener á los revoltosos, y si ha llegado el caso del estado de sitio, yo le prestaría mi voto; pero por estas breves consideraciones, voy á votar en contra del proyecto en debate.

Sr. Carlés—Pido la palabra.

Deshonraría mis convicciones más cordiales y profundas si disimulara en silencio mi voto en contra de esta ley.

La primera pregunta que hace un instante me hice á mí mismo, porque quizá esté meditando en público, fué esta: ¿qué motiva esta ley? ¿La necesidad de las circunstancias, ó la debilidad del poder ejecutivo? Si fuera lo primero, me respondí: sería una cobardía; si lo segundo, sería una vergüenza!

Se ha invocado como uno de los tantos motivos para justificar la sanción de esta ley, el hecho de que millares de obreros, usando de un derecho, y abusando quizá, se hayan levantado en son amenazador contra la tranquilidad pública.

Pero, señor presidente, aun aceptando el criterio de la conmiseración que despierta en las almas tiernas la contemplación de ese mundo miserable que se agita en los bajos fondos europeos, para explicar en todo caso las inclemencias del hambre no satisfecha, me trasplanto á mi país y juzgo cuál es la situación del obrero, para sacar como consecuencia que esta huelga no reviste la gravedad que se le quiere dar.

El trabajo es abundante entre nosotros, es rico, es pródigo. Actualmente el interior de la República y las provincias agrícolas y ganaderas vecinas á la capital exigen brazos, pagando salarios que en otras partes pudieran considerarse lujosos.

Y me digo, señor presidente: ¿es esto lo que levanta estas multi-

tudes en contra de la tranquilidad social? ¡Nó!

Quisiera dar un dato que ha impresionado más fuertemente mi convicción, en contra de esta ley.

Se acaba de fundar una sociedad comercial bajo esta base: entregar la tierra en propiedad al colono que quiera cultivarla y que durante seis años consecutivos haya podido conseguir cosechas bastantes para pagar un 70 por ciento de su precio á la administración, reservándose el 30 por ciento necesario para abonar brazos y demás gastos.

Me pregunto: en un país donde se realiza este gran ideal de entregar á particulares la propiedad de la tierra, vislumbrándole en el porvenir, riquezas y satisfacciones completas, ¿es el hambre, las dificultades, la desesperación del obrero lo que motiva estas multitudes acumuladas en contra del supuesto orden social? Nó, señor presidente: la causa está en otra parte, quizá, y no se va á satisfacer con leyes, ni con la intervención de la policía.

Lo que falta, señor presidente, entre nosotros, es energía, es prudencia, es circunspección, es conocimiento de las cosas, es espíritu dispuesto á mejorar la situación de todos. Y digo que no es con leyes de un carácter premioso, impremeditado y por consiguiente, de efectos fugaces, con lo que se va á satisfacer estos clamores públicos que se levantan en este instante en la capital y en sus alrededores.

Nó, señor presidente; causas más complejas, arraigadas más profundamente en nuestros vicios nacionales, son las que van á traer como consecuencia, quizá, hechos más lamentables, pero que con la terrible inflexibilidad de la lógica, sucederán. Me refiero á que aquí intervienen causas financieras, causas sociales, causas políticas. ¿Se ha estudiado acaso, cuál es la situación de ese pueblo que trabaja para el día y que vive al día? Se ha podido suponer que existe el secreto de interpretar esas necesidades en la elevación de los impuestos, en la mala distribución de las contribuciones y en la falta de percepción equitativa de las mismas? ¿Se ha podido acaso suponer, si en la mente del gobierno existe suficiente elevación de espíritu para estudiar las causas que agitan la situación obrera de la República? ¡Y qué extraño, señor presidente—lamento que una triste y trágica hilaridad venga en este instante á festejar mis ideas—qué extraño es que el pueblo esté en huelga,

cuando hasta el presidente de la República y todo el poder ejecutivo nacional se declaró en huelga, hace quince días, para festejar con entretenimientos y conmemoraciones, hechos y obras más ó menos problemáticas!

Y concluyo por inducir, señor presidente, ¿que hay qué hacer? Porque es necesario decir la verdad clara y neta para ser creído y ser respetado. ¿Cuál es el motivo, la autoridad de esta ley? Amenazas; y un gobierno que exige medidas extraordinarias ante amenazas, es un gobierno que no está á la altura de las circunstancias.

Por estas razones, en vez de votar esta ley, recomendaría á la opinión que exigiese de sus poderes públicos más energía, más virilidad, más acción, porque el gobierno que comprende su misión es capaz de realizarla. Nada más.

Sr. Balestra.—Pido la palabra.

En circunstancias como estas, que á mi juicio son graves, creo deber fundar mi voto con toda la sinceridad que imponen estas mismas circunstancias.

El señor ministro del interior, con su palabra siempre simpática y blanda, empezaba diciéndonos que no había llegado el momento de acudir á recursos extremos, que por eso se proponía tan solo esta ley.

Disiento fundamentalmente con este modo de ver las cosas: creo que el recurso extremo y grave es esta ley: que el recurso sencillo, usual y conocido es el estado de sitio de que se ha usado en infinidad de ocasiones, y que en este caso bastaría para armar suficientemente al poder ejecutivo contra toda agitación subversiva, sin traer una lesión á intereses que por estar particularizados en la ley pueden parecer heridos injustamente, cuando menos conmoviendo las susceptibilidades de estos que llamamos extranjeros y que en definitiva son los que nos han ayudado á formar esta nación.

El solo hecho de que mientras el senado era llamado urgentemente para deliberar esta tarde, se repartieran las citaciones para que esta cámara considerara por la noche este asunto; la circunstancia de que estemos tratando esta ley—á la que todo se le puede reconocer menos que no suscite divergencias constitucionales, el hecho, por fin de que seamos invitados á tratarla sin conocerla casi, habiéndola oído por primera vez de los labios del señor secretario—es mi caso y estoy seguro que el de muchos señores

ha dictado en virtud de circunstancias extremas y graves, pero por lo mismo que eran extremas y graves, después de largas meditaciones y profundo estudio; todo esto revela que la situación es grave y que el remedio á que se acude es anormal.

El señor ministro se ha equivocado en la apreciación de la situación, tal vez por una causa de ubicación. Su despacho está más hacia la plaza de Mayo, mientras que los otros ministerios, el de hacienda, por ejemplo, está colocado del lado del puerto. Así el señor ministro de hacienda me sacaba esta tarde al balcón de su despacho y me decía: Mire el puerto! Se me sobrecogió el ánimo de dolor al ver aquellos diques en que los paquetes cuyos vientres contienen todas las mercaderías que han de dar movimiento al comercio de esta capital, permanecían silenciosamente alineados, completamente desiertos; ni una sola carga se despachaba. Se sentía esa tristeza de la inacción en los sitios habituales del trabajo. Los huelguistas, con una perspicacia que honra á sus directores, han ido á herir de parálisis á un instrumento de civilización cuya importancia no habíamos apreciado hasta ahora: con el carro.

El carro es el que lleva las mercaderías de los depósitos á las casas de comercio por mayor, de éstas á los minoristas; en fin, hace el detalle de la circulación de las mercaderías. Su falta ha trabado de golpe todo el movimiento comercial de la ciudad. La aduana, que da de doscientos cincuenta á trescientos mil pesos diarios, hoy ha dado veinte mil; mañana no dará nada!

El señor ministro de hacienda me mostraba la estratagema de que se valía para asegurar la circulación de los carros. Iban cuatro de esos vehículos custodiados cada uno—era eso de una cominidad que tenía algo de trágico—por dos lanceros! Pero en ese momento un grupo de huelguistas que se desparaban por esos paseos miraban hosca-mente, y señalando á los carreros con manos airadas, trataban de fijar en su retina la fisonomía de ellos para la venganza de más adelante.

Esos hechos de ataque del huelguista al que no lo acompaña, esos actos de presión y de contagio son los que constituyen el fenómeno de la huelga. Ese obrero—hoy es sábado—tenía que cobrar en este día el jornal que era la alegría de la familia y el pan de los niños: hoy ha faltado ese pan; y el do-

Noviembre 22 de 1902

lor de la familia va á olvidarse en una taberna. Allí se forma ese compañerismo exaltado que saldrá mañana en las horas más imprevistas á la calle, y que tratándose de treinta, de sesenta mil hombres, quizá pueda hacernos asistir á escenas que no podríamos evitar, y que tal vez se nos pueden producir—porque no tenemos la previsión del gobierno—en una forma aterradora, y de las que para el gobierno seremos nosotros los responsables por no haberlas previsto.

Tal es someramente el fenómeno que está pasando. Y yo me digo: ¿en tales momentos hemos de tomar un proyecto muerto, fenecido, y vuelto á revivir, que había allí en el senado; y hemos de dar en sesiones nocturnas con una ley contra unos cuantos extranjeros, más ó menos mal conceptuados, solución á este problema enorme que se nos está presentando con voces de urgencia y que nos obliga á obrar enérgicamente para mantener las primeras garantías sociales, la tranquilidad, el orden público, el comercio, todos los intereses que están ya tan gravemente afectados? ¿Es esto prudente ó siquiera congruente con la gravedad del mal? ¿No es empequeñecer las cuestiones y al mismo tiempo atacar hasta el respeto mismo que debemos al parlamento, sancionar estas cosas tan de golpe, tratadas, así, á la ligera, como si no se tratara de leyes permanentes?

¿Podemos creer siquiera que esta ley en vez de curar no exalte á las gentes entre las cuales va á caer como un explosivo, porque la entenderán con el criterio de los exaltados?

¡Pero, señor, estas cosas tienen una larga historia y cada vez se va alargando más! Yo sostengo que esta ley es insuficiente para cortar los fenómenos que pueden producirse.

Hace algún tiempo se produjo la huelga de panaderos. Ese gremio presenta un fenómeno psicológico; los señores diputados me han de creer lo que voy á decir y que debo á revelaciones de uno de los más íntegros, laboriosos é inteligentes jueces de instrucción, el doctor Navarro.

Los panaderos se declararon en huelga; ese gremio trabaja de noche: la alteración fisiológica de la vida quizá lo hace uno de los gremios más exaltados en las horas de aprisionamiento; cometieron entonces varios asesinatos; se allanó el recinto de la Federación obrera—encontró que está establecida la solidaridad, la sumisión, la orga-

nización de los obreros en una forma que les da una enorme eficacia en esta capital para movimientos de esta naturaleza. Hay allí registros perfectamente anotados; hay divisiones por gremios, una dirección superior que es la que acaso está moviendo todo esto; porque la particularidad grave de nuestras huelgas es que no podemos compararlas con las europeas; es un fenómeno nuestro, sumamente original, que no sé si es de desgobierno, ó de juventud de pueblo, pero lo que sé es que reviste todos los caracteres mórbidos de una enfermedad enteramente anárquica y sediciosa que parece que quiere inocularse á las clases bajas de la sociedad.

Nosotros no tenemos el proletario europeo. En nuestros hombres del pueblo no vemos la espalda encorvada, la carenita, el cuerpo débil, fláxido, de aquel obrero que ha conocido todas las opresiones de la servidumbre sedimentadas durante siglos enteros. Nuestro obrero es sano, bien comido; tiene el porvenir abierto; centenares de ellos llegan á la fortuna; su aspecto es de vigor, rosado, hermoso, viste bien, él y los hijos que lleva consigo—lo hemos visto cuando la visita del presidente Campos Salles. ¿A qué obedecen estos movimientos anárquicos, entonces? Todos lo indican: es á la inoculación de ideas extrañas, de elementos mórbidos que nos están viniendo de afuera; pero elementos que se van infiltrando en nuestros bajos fondos nacionales: en la Federación obrera son tantos ó más los elementos nacionales que los extranjeros que hay allí.

Ahora bien; yo pregunto á los que exigen la ley de expulsión de extranjeros, ¿qué haremos con los anarquistas nacionales que están en acción? ¿Qué haremos mañana cuando el poder ejecutivo, si llegan á producirse las conmociones que yo preveo—y ¡ojalá me equivoque!

—necesitará obrar sobre todos los elementos, hasta sobre la prensa también? Yo sé que la prensa tiene que ser la expresión del movimiento general de la sociedad; pero en ciertos momentos la sociedad debe exigirle que sea la representación del orden social, y si no puede obligarla á decir todo lo que conviene, debe obligársela á callar sobre muchas cosas.

Por estas consideraciones, votaré por el estado de sitio lisa, llana é inmediatamente, para armar al poder ejecutivo de una ley con la cual pueda defender á la sociedad,—sin perjuicio de que en las primeras sesiones, ó en la sesión pri-

mera, si se quiere, nos ocupemos de esta ley,—así como he de apoyar también calurosamente la moción del señor diputado Lacasa, sobre nombramiento de una comisión de la cámara popular, para que se apersona á los obreros y estudiando aquel medio, sintiendo las palpitaciones de ese mundo, pueda traernos un resumen de sus observaciones.

He dicho.

Sr. Ministro del interior—Pido la palabra.

Siento muchísimo carecer de esas admirables dotes oratorias que tanto ayudan á la improvisación de los señores diputados, como la misma ilustración con que tratan las cuestiones que se presentan, por más complejas que sean: lo que demuestra la exactitud de mi juicio anterior de que posee esta cámara los elementos bastantes para discutir en cualquier momento todas las leyes que reclame la seguridad y el orden constitucional del país. Pero á falta de estas cualidades que siempre he deplorado en el seno de esta cámara, y que no puedo crear, voy á limitarme á desvanecer, si es posible, los escrúpulos constitucionales opuestos á la sanción de esta ley.

En primer lugar, y voy á ser muy breve, no se trata de imponer una pena á ningún extranjero. Se trata simplemente del ejercicio de un derecho político, perfectamente reconocido, comprendido dentro de los términos de nuestra constitución, y reconocido por todos los pueblos cultos como un derecho inherente á la soberanía, como lo declaran los jurisconsultos y lo establecen todas las jurisprudencias similares á la nuestra, que autorizan á excluir, sin declararlo por eso culpable, á todo extranjero, á todo miembro adventicio de la comunidad, que no se aviene con las reglas ordinarias de la vida de la sociedad que lo ha admitido en su seno. La exclusión del extranjero que perturbe el orden social no significa una pena, desde el momento que no se le devuelve por requisición de ningún tribunal al país que le ha condenado: importa simplemente mostrarle las fronteras del país y decirle que su permanencia no conviene, que no condice con las leyes que rigen nuestra organización social. No importa una pena; por lo tanto fallan por su base las observaciones que los señores diputados han formulado sobre las facultades judiciales del presidente de la República, que los ha sucedido en el sena-
do, á comparárlas con facultades ex-

traordinarias que ya murieron con la organización definitiva del país, y que sólo tienen sentido histórico, enteramente fuera de lugar é imposible de reproducirse más, dada nuestra cultura actual.

Debemos desechar todas esas hipérbolos á que nos lleva nuestro temperamento apasionado, y la misma elocuencia que caracteriza á los oradores de esta cámara, que muchas veces, para producir el efecto natural de una imagen ó de una frase feliz, olvidan que tratamos de leyes prácticas, y que estamos aplicando una ley fundamental que por todos ha sido definida como instrumento de gobierno.

Si el proyecto que está á la consideración de la honorable cámara fuera analizado artículo por artículo, se vería que en nada compromete facultades constitucionales.

El primero habla de los extranjeros condenados ó perseguidos por tribunales extranjeros, que llegan á nuestro país fugando de la justicia que los ha condenado y sin derecho por consiguiente para habitar honestamente en su seno, desde que nuestra constitución sólo abre las puertas del territorio, como muy bien lo establece su artículo 25, á aquellos que tienen la intención honesta de colaborar en el progreso intelectual y económico del país.

La distinción, la hace la propia constitución, y no debemos invocar su preámbulo con la latitud inmensa que puede dársele, sino en los casos de obscuridad de los términos ó cuando en el estatuto que se aplica no exista ninguna cláusula precisa ó literal que prevea el caso.

En el segundo se habla de los extranjeros residentes en el país que perturben el orden público y la seguridad social, la seguridad nacional. No podemos poner en duda la facultad de alta policía de los poderes públicos para dictar una medida inmediata, tendiente á librar al país de la acción de estos elementos perturbadores, en el momento en que los hechos se producen.

En el caso de un extranjero que atenta contra la seguridad de la nación, que viene, por ejemplo, siendo agente de un enemigo del país, que dentro del país realiza actos que atentan contra la patria, ¿con qué derecho podríamos,—sin necesidad de formación de juicio ni de ninguna de esas morosidades enormes, que en casos urgentes son verdaderos peligros nacionales,—con

Noviembre 22 de 1902

qué derecho podríamos impedir que los poderes públicos se apoderasen de ese elemento de perturbación, de peligro nacional, y le mostrase sencillamente la frontera, como diciéndole que su presencia no es conveniente á la seguridad ni á la tranquilidad social?

No se trata, señor presidente, de clasificar la conducta del extranjero, de declararle delincuente, nó; se trata simplemente de una medida de prevención, de seguridad social, de seguridad política. En este sentido ha sido reconocida por la legislación de los Estados Unidos, que ha estado bajo el régimen imperante aquí, donde las policías de los estados tienen atribución para hacer volver de los mismos puertos donde desembarcan, á los inmigrantes que se presentan en malas condiciones del punto de vista moral ó del punto de vista higiénico.

Las sentencias de los Estados Unidos, en tres casos de los más notables en que ha sido fallada esta cuestión, principalmente con motivo de la exclusión de los chinos y otros «elementos perniciosos», clasificados así por las leyes del país, han establecido ya de una manera irrevocable el poder de la soberanía para excluir todos los elementos malsanos; y esta facultad la ejerce naturalmente el poder ejecutivo, porque si la constitución ha de ser un instrumento eficaz de gobierno, no puede crear dificultades para curar males en que debe procederse rápida é inmediatamente, como en la exclusión de los elementos perturbadores, reales y visibles, que tenemos en nuestra presencia.

Por otra parte, el poder ejecutivo ha tomado ya, y no podía dudarlo la honorable cámara, todas las medidas posibles dentro de las atribuciones que en el orden normal de nuestras instituciones le confieren las leyes del país. Cree que esta medida bastará para asegurar la tranquilidad, el orden y la libre circulación del comercio; pero si no bastase y estimara necesario armarse de otros recursos que actualmente no posee, será el primero en venir á pedir al congreso que sancione la ley de estado de sitio, que es medida excepcional,—y convendrá conmigo la honorable cámara—extraordinariamente excepcional desde que es la suspensión de casi todas las garantías constitucionales.

Si la situación se reagrava, si realmente el estado de sitio es requerido por los sucesos, no dude la honorable cámara que el poder ejecutivo aceptará

este ofrecimiento que desde luego recibe como un voto anticipado, como una indicación saludable para el momento en que el peligro sea inminente.

Por lo demás, señor presidente, me atengo á las palabras que he pronunciado. Esta ley—volveré sobre las facultades judiciales—tampoco excluye las funciones de la justicia, desde que todas las leyes que el congreso dicta quedan sometidas á la intervención de los tribunales nacionales, en caso que la autoridad que debe ejecutarlas abuse ó falte á los deberes que en ellas están comprendidos: no importa una delegación del poder judicial, ni una absorción de facultades legislativas; y es por esto que el poder ejecutivo viene á reclamar que se le arme de esta facultad, que no puede dudarse que será ejercitada como la usaría todo gobierno argentino en nuestro actual estado de civilización; y si algunos hombres pudieran sentirse tentados á abusar del poder excepcional, tenga por seguro la cámara que el medio ambiente, la cultura de los cuerpos políticos del estado y la cultura del país entero, le impedirían ejercitar abusivamente los poderes que ponga en sus manos. Crea que, en este caso, el poder ejecutivo usará—como ha usado otras veces de poderes discrecionales que el congreso le ha dado—con la mayor justicia y equidad y solo en la medida de las necesidades, de los poderes que por esta ley le dé el honorable congreso.

He dicho.

Sr. Leguizamón (L.)—Pido la palabra.

Desde esta tarde, cuando tuve conocimiento de que la cámara debía reunirse con el objeto con que lo está, trabajaba mi pensamiento la idea de que era mejor ir directamente al estado de sitio, porque una de dos: ó estamos bajo una situación grave ó no lo estamos. Si lo primero, sería conveniente llegar á usar de una medida completamente eficaz para que el poder ejecutivo pudiera sacar al país de la situación grave en que se encuentra. Si lo segundo, no me explico absolutamente el apresuramiento en dictar una ley tan importante como esta, que en el sentir de muchos de los señores diputados compromete principios constitucionales, una ley que ha estado durmiendo hace algún tiempo en las comisiones del senado que la han tenido á su estudio, y que llega de una manera premiosa, golpeando apresuradamente las

puertas de la cámara de diputados y obligando á reunirnos en sesión extraordinaria, como es la que estamos celebrando, para tratarla.

Yo no sé, señor presidente, si realmente el poder ejecutivo se coloca á la altura de las circunstancias, ó si viene eludiéndolas; pero si sé, desgraciadamente, que la medida que se propone es más de carácter preventivo que de carácter curativo para los males que están afligiendo á la capital de la República y que se extienden á algunos pueblos de la provincia de Buenos Aires, y que por más que el señor ministro quiera presentarnos la situación exenta de peligros, yo creo que ella tiene tal gravedad que puede acarrear serias perturbaciones.

Por esto, señor presidente, sin ser en absoluto contrario á los principios que informan esta ley, debo manifestar en pocas palabras la razón porque voté en contra de que se tratara este asunto sobre tablas y por la cual tendré el sentimiento de votar ahora en contra de su sanción en general y en particular, y es la siguiente: por la falta de eficacia para las circunstancias actuales, si las circunstancias actuales son graves, y porque una ley de esta naturaleza es necesario que no se dicte bajo la presión de circunstancias semejantes á las que está pasando en este momento la capital de la República. Ella debe discutirse y dictarse en momentos en que el ánimo del legislador esté completamente sereno, que no pueda ser perturbado por temores quizá vanos ó por temores positivamente reales que le arranquen una sanción precipitada, que le quite á una ley de esta naturaleza todo el prestigio que ella debe tener para que sea eficaz y se haga efectiva.

Por estas razones, repito, votaré en contra de la ley.

He dicho.

Sr. Vedia—Pido la palabra.

Me parece que hay incongruencia en sostener, por una parte, que esta ley es insuficiente, y en sostener por otra que debemos ir á la ley extrema del estado de sitio. Si eso es la menos, lo correcto y lo prudente sería empezar por ella.

Sr. Roldán—Pero el estado de sitio es transitorio y la ley en debate es permanente.

Sr. Vedia—Claro es que si la situación actual se agravara, exigiría del congreso y del poder ejecutivo medidas serias. Pero entonces estaríamos llamados á considerar la ley de estado

de sitio, á que se han referido los señores diputados Roldán y Balestra.

Del punto de vista constitucional, el señor ministro del interior ha dicho al respecto lo suficiente. Considerada la constitución como instrumento de gobierno, considerada como instrumento de bienestar, de felicidad pública, no es posible que esté sometida á trastornos sociales del carácter del que tratamos de conjurar ahora.

En cuanto á los extranjeros, de quienes se ha dicho que nos han ayudado á formar la nacionalidad, nada tiene que ver con ellos esta ley; precisamente ella va contra aquellos que pretenden retardar la consolidación del régimen social, introduciendo el virus de enfermedades que no tienen terreno propicio para desarrollarse entre nosotros y que sólo pueden motivar conmociones, de un día, como estas que sentimos en los momentos actuales.

Esta ley, señor presidente, tiene ya su principio en una ley argentina, en la de inmigración del 76, que establece restricciones para la misma, en los casos de lisiados, de enfermos, de valedudinarios, etcétera. Y es claro que así sea: los hombres del mundo que quieran habitar este suelo, no ha de entenderse que sean los que nos traigan sus vicios, sus rencores, sus enfermedades, el residuo de los fermentos europeos, de las naciones de que precisamente son expulsados y que vienen aquí en busca de un nuevo campo para sus tendencias que, absolutamente, no han de desarrollarse.

He de votar, pues, tranquila y conscientemente por esta ley, no sólo por las razones dadas, sino por cuanto se trata de una ley de policía incorporada á todas las legislaciones del mundo.

No estaría preparado para improvisar, desde luego, sobre esta materia, y apenas si ligeramente he hecho lecturas que están al alcance de todos y que nos dicen que esta disposición es la misma que está consignada en la legislación norteamericana, dictada después del atentado de Mackinley; que esta disposición, en términos análogos, está establecida en muchas de las constituciones de los estados de la Unión, que está en la ley francesa reformada, en el código penal francés que pone en manos del ministro del interior esta arma de defensa; es la misma disposición de la ley belga, la misma de la ley de Holanda, con una limitación favorable precisamente á la interpretación que defien-

do, pues crea un tribunal encargado de determinar—simplemente para los casos de traslaciones dentro del territorio ó de expulsiones—si realmente es extranjero el acusado, si no tiene un domicilio constituido ó no se ha casado en el territorio.

De manera, señor presidente, que con esta ley no vamos á hacer otra cosa, repito, que incorporar á nuestra legislación una medida de defensa policial, de higiene social, incorporada ya á todas las legislaciones europeas.

El poder ejecutivo nos decía por intermedio de su ministro del interior que esta ley le bastará para evitar por el momento mayores males. ¿Y qué inconveniente habría más tarde, si desgraciadamente fuera necesario, para dictar las medidas extremas que se indicaban hace un momento?

He dicho.

Sr. Gouchon—Pido la palabra.

Sr. Presidente—Para una rectificación simplemente.

Sr. Carbó—Hago moción para que se declare libre el debate.

—Suficientemente apoyada esta moción, se vota y es aprobada.

Sr. Gouchon—Tanto el señor ministro del interior, como el señor diputado Vedia, han considerado que los artículos del proyecto en discusión tienen un mismo carácter, y sin embargo hay una diferencia fundamental entre el primer artículo y los siguientes.

Las disposiciones contenidas en la ley de inmigración que prohíben la entrada de los mendigos, de los hombres mayores de sesenta años y de personas inhabilitadas para el trabajo y sin recursos, no afectan los artículos constitucionales que he citado, porque el que llega al país no es habitante mientras no entra en él.

Entonces, la acción que indicaba el señor ministro que ejercían los prefectos de los puertos norteamericanos, no es con relación á los habitantes de Norte América, es con relación á los que pretenden entrar al territorio norteamericano.

En tales casos se impide la entrada del extranjero que se considera perjudicial á los intereses del estado.

Pero, señor presidente, la ley que está á la consideración de la cámara no es tampoco análoga á la que se ha dictado en los Estados Unidos: aquella es una ley que afecta á los que se declaran

anarquistas, á los que hacen pública profesión de fe de desconocer la organización social de aquel país, de atentar contra el derecho de propiedad y de la vida. Entonces la ley norteamericana establece que tales declaraciones constituyen un delito; y las personas que las hacen son juzgadas como delincuentes y se les aplica la pena de destierro. Pero el proyecto de ley que está á la consideración de la cámara no se refiere á los anarquistas: se refiere á todos los habitantes del país que no sean argentinos ó argentinos naturalizados, y da al presidente de la República la facultad de desterrar del país á cualquiera de esos habitantes, poco importa que sean ó no anarquistas, ó sean aquellos á que se refiere el artículo 25 de la constitución, que ha citado el señor ministro, es decir, los extranjeros que vienen á labrar la tierra, á mejorar las industrias, á introducir y enseñar las ciencias y las artes. ¿Qué distinción hay en esta ley? ¿Acaso se dice á qué clase de extranjeros se refiere? ¿Acaso dice, por ejemplo, los extranjeros que no tienen profesión?

Sr. Ministro del interior—Están definidos en la ley. El señor diputado se pone en un terreno hipotético para combatirla.

Sr. Gouchon—Bastará que el presidente de la República considere que cualquiera de esos habitantes que labran la tierra, que mejoran las industrias, es perturbador del orden público...

Sr. Luro—Ya no labra la tierra, labra nuestra infelicidad, y por eso se le destierra.

Sr. Gouchon—Ese es el gobierno absoluto, el gobierno del zar de Rusia, dueño absoluto de vidas y haciendas, al cual le basta su criterio para imponer penas.

El código penal, en el artículo 54, enumera cuáles son las penas que en él se establecen, y en su inciso 8º consigna como una de ellas el destierro. ¿Quién aplicaría esa pena, según esta ley? El presidente de la República. Y, sin embargo, hay un artículo de la constitución, que he citado anteriormente, que dice que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo.

El señor ministro decía: No; ésta no es una pena.

El destierro es una pena establecida en nuestro código, digo yo, y es considerada como tal en todas las legislaciones del mundo.

El señor ministro agregaba: Es que

se va á aplicar sólo á los extranjeros culpables.

Pero ¿quién va á apreciar la culpabilidad? El presidente de la República, ejercitando facultades judiciales contra el texto expreso de la constitución.

Decía el señor ministro: Es que esta ley también se aplicará á los extranjeros condenados por los tribunales de otros países.

Pero, señor presidente, los que están en la República se hallan bajo el amparo de nuestras autoridades judiciales. No basta que haya sido condenado en el extranjero para que el individuo sea tenido por culpable; es necesario que la sentencia del tribunal extranjero se ajuste á las leyes de este país, y esa apreciación la hacen los tribunales de la República.

Se ha dicho que se va á aplicar á aquellos que perturben el orden público.

Pero ¿no hay acaso en nuestra legislación penas establecidas para los que perturban el orden público? ¿Por qué se va á establecer la desigualdad entre el habitante argentino y extranjero? ¿Por qué el habitante argentino que perturba el orden público ha de tener la garantía de la justicia y no ha de tenerla el habitante extranjero? ¿Por qué los derechos que afectan la libertad personal y el honor del habitante extranjero han de ser resueltos por el Presidente de la República, que es el único que no tiene facultades judiciales, el único que no puede pronunciar fallos?

Repito que esta ley es inconstitucional y que será completamente ineficaz.

Las huelgas no producen por sí mismas los males que se sienten en estos momentos; estos males se producen porque los huelguistas atentan contra los derechos de los que no se dejan arrastrar por ellos; y el medio racional de combatir esto es la reforma del código penal, estableciendo una pena especial para estos casos, pena severa, proporcionada á la conmoción social que producen estos hechos, aplicada por igual á los extranjeros y á los argentinos. Pero dictar una ley de esta naturaleza, que va á ser burlada mañana, porque los agitadores tomarán carta de ciudadanía, porque los agitadores pueden ser argentinos, traerá un malestar profundo en la República, porque es natural que los habitantes extranjeros se sentirán afectados en sus derechos primordiales, puesto que con esta ley se les quitan las garantías que tienen

los argentinos y que la constitución ha dicho que son tanto para los argentinos como para los extranjeros.

La constitución está inspirada en el principio de igualdad entre el argentino y el extranjero, y más aún, ha establecido en un caso, una desigualdad entre ellos, porque mientras concede al extranjero el ejercicio de todos los derechos civiles, cosa que no sucede en los Estados Unidos, porque en aquel país aun para ser propietario de bienes raíces es preciso ser ciudadano norteamericano, le acuerda el ejercicio de los derechos políticos con sólo tomar carta de ciudadanía y le exime del servicio militar durante diez años, lo que constituye un privilegio sobre el argentino. Nuestra constitución está inspirada en el principio de la igualdad humana, que ha de ser, con el tiempo, consignado en todas las constituciones liberales del mundo.

Nuestra constitución ha sido basada en el espíritu liberal que impulsa el progreso de la humanidad y que nos hace considerar iguales á todos los hombres, sin distinciones por razón del lugar de su nacimiento, y que ha tenido la virtud de atraernos el concurso fecundo de la inmigración europea.

Ahora contra el texto y el espíritu de esa constitución se va á dictar una ley que establece el principio de la desigualdad entre el habitante argentino y el extranjero!

Yo, señor presidente, voy á votar decididamente en contra de este proyecto de ley; voy á dar mi voto en favor de la igualdad constitucional para los argentinos y para los extranjeros, pues creo que es una verdadera injusticia que porque haya media docena de extranjeros que agitan á los huelguistas, se mida con la misma vara á todos los establecidos en el país. (*Exclamaciones en las bancas: ¡no!, ¡no!*)

¡Cómo nó, señor presidente! ¡Que se lea el artículo 2.º, y se verá si es cierto lo que digo!

—Se lee el artículo 2.º

«El poder ejecutivo podrá ordenar la salida de todo extranjero cuya conducta comprometa la seguridad nacional ó perturbe el orden público».

Sr. Gouchon — El poder ejecutivo podrá expulsar del país á todo extranjero que según su criterio perturbe el orden público, y sin embargo no podrá expulsar á un argentino que se encuen-

tre en el mismo caso. Entonces hay una evidente desigualdad.

La constitución ha establecido la igualdad de los habitantes del país, y esa igualdad, señor presidente, va á ser destruida por esta ley. Ella viene á destruir una de las conquistas más nobles consignadas en nuestra constitución: la igualdad de los hombres. Esta ley viene á establecer la desigualdad entre el extranjero y el argentino.

Por eso, señor presidente, en nombre de la igualdad constitucional, voto en contra de este proyecto de ley.

Sr. Vivanco (P.)—Pido la palabra.

Voy á fundar mi voto, señor presidente, en muy pocas palabras, en favor del proyecto que se discute, tomando como punto de partida las mismas palabras con que ha terminado el señor diputado por la capital.

Invocando la prescripción constitucional, de la igualdad de todos los habitantes ante la ley, él ha pretendido sacar la consecuencia de que la sanción de este proyecto de ley traería como resultado inmediato establecer una desigualdad.

En mi concepto, toda la argumentación del señor diputado parte de un error, de un error fundamental que consiste en tomar las palabras de la constitución que establece la igualdad ante la ley de todos los habitantes, en un carácter político, cuando solamente han sido empleadas en un carácter civil. La igualdad política no puede absolutamente establecerse entre el extranjero y el nacional, por la sencilla razón de que, por nuestra constitución, los derechos políticos están en poder de los ciudadanos argentinos, y jamás puede la nación dar á los extranjeros ese derecho porque importaría, de una manera indirecta y á veces de una manera directa, entregar su propio gobierno á los que no sean argentinos. (*Muy bien! muy bien! Aplausos*).

Puede entonces, señor presidente, darse por descartado el argumento, porque precisamente la constitución ampara esta prescripción de la ley que establece la diferencia política, y deja una perfecta igualdad ante la ley civil.

Y respecto de los antecedentes que el mismo señor diputado invocaba, también ha incurrido en un error categórico que me voy á permitir rectificar recordándole la legislación de los Estados Unidos que él mismo ha citado, en mi concepto muy poco favorable á la tesis

Ha invocado la ley que se dictó después del asesinato de Mackinley; pero no ha recordado que existían multitud de leyes que establecían condiciones mucho más graves por las causas que invocaban, que esta ley sometida á nuestra deliberación por el poder ejecutivo.

Así, por ejemplo, la ley que establece la expulsión de los chinos, que lleva la fecha de mayo 5 de 1892 y cuyas cláusulas principales me voy á permitir leer tománolas de esta recopilación que el autor del proyecto, doctor Cané, publicó para que no nos tomara de sorpresa este proyecto que tiene dos años de antigüedad...

Sr. Balestra—Que no conocemos.

Sr. Vivanco (P.)—La culpa no sería del autor del proyecto sino del descuido nuestro que teniendo á estudio y sanción un proyecto de ley, no lo hemos tomado en cuenta.

Sr. Luro—Y que se repartió profusamente á todos los miembros del congreso.

Sr. Carlés—Lo que demostraría la inoportunidad del proyecto.

Sr. Vivanco (P.)—Yo no voy á discutir la situación en que se encuentran otros diputados...

Sr. Carbó—Yo observo que ese proyecto no ha estado á estudio de esta cámara.

Sr. Vivanco (P.)—Pero ha podido conocerlo lo mismo que yo, desde que ha sido publicado y presentado á una de las ramas del poder legislativo.

Como decía, no discuto la situación de los señores diputados que no conocen el proyecto: acepto la situación de los que no lo conocen.

Sr. Balestra—Yo lo he conocido hace dos años, pero se me ha perdido el folleto. El señor diputado ha sido más feliz que yo y lo ha encontrado hoy, seguramente.

Sr. Vivanco (P.)—La he conservado; y este cuidado mío me permite dar conscientemente mi voto en favor del proyecto.

Voy á continuar, señor presidente.

Esta ley dice que los chinos tienen el derecho de permanecer en los Estados Unidos á condición de acudir dentro de un año á un recolector de impuestos internos para que le otorgue un certificado de residencia, y no teniendo, son expulsados.

Y así ha sido resuelto por la corte suprema de los Estados Unidos.

Respecto del carácter de pena que se

quiere dar á la función policial y no judicial de la expulsión del extranjero, dice la misma corte de los Estados Unidos: «La orden de deportación no es un castigo por un crimen. No es un destierro en el sentido en que esa palabra se aplica á la expulsión de un ciudadano de su país como un castigo. Es únicamente un medio de compeler al regreso á su propio país de un extranjero que no ha cumplido con las condiciones de cuyo cumplimiento hace depender el gobierno de la nación su permanencia en el territorio, usando de su autoridad constitucional. Él no ha sido privado de su vida, libertad ó propiedad sin el proceso debido; y los principios de la constitución que aseguran el derecho de ser juzgado por el jurado y que prohíben investigaciones y arrestos ilegales y castigos crueles y fuera de uso, no tienen en este caso aplicación».

Queda entonces evidentemente demostrado, con los propios antecedentes legislativos que citaba el señor diputado por la capital, que no es una ley inconstitucional, ni se altera con ella absolutamente la igualdad civil en el grado que establece la constitución, ni significa una pena, sino sencillamente una medida policial.

Además, esta legislación no puede tomarnos de sorpresa. Nosotros no vamos á crear nada, vamos en realidad á repetir la legislación que hoy día puede llamarse universal. Todas las cláusulas de este proyecto forman ya parte de la legislación de los pueblos civilizados.

Hay otra observación hecha por el señor diputado y, que casi he olvidado tomar en cuenta:

Él entendía que el artículo 2.º de esta ley importaba una amenaza para todos los extranjeros, cuando, precisamente, se ha establecido de una manera clara, jurídicamente, á cuáles extranjeros se refiere este artículo de la ley. Este temor de los extranjeros que han venido á labrar la tierra y á traer el concurso de su ciencia y de las artes para el mayor progreso nacional, que es lo que quiere proteger realmente la constitución, en mi concepto valdría tanto como el que podrían tener todos los hombres honestos porque se sancione un código penal que castigue el robo y el homicidio, los delitos contra las personas y la propiedad.

Sr. Lacasa—Para eso hay jueces.

Sr. Vivanco (P.)—... porque son delitos del derecho común. ¡Es claro!, el código penal para esos casos;

pero se trata de lo que no ha sido previsto, de lo que no es por el momento propiamente un delito y no hay más que aplicar la ley de carácter policial.

Sr. Balestra—Para sancionar el código penal ¿nos citarían de noche apresuradamente sin darnos tiempo para leerlo siquiera?

Sr. Vivanco (P.)—No tratamos ahora de dictar el código penal.

Sr. Balestra—Es que el señor diputado hacía notar la analogía con el código penal; y yo le pregunto, si se tratara del código penal ¿nos citarían de noche apresuradamente para sancionarlo?

Yo creo que es necesaria esta ley, pero que debemos estudiarla.

Sr. Vivanco (P.)—No está previsto el caso y por consiguiente tenemos que recurrir á esta ley, y yo no he hecho notar analogías con el código penal porque sé muy bien que el uno no excluye la otra, como lo prueba el hecho y el ejemplo en otros países.

Sr. Balestra—Pero, señor diputado, tenga un poco de consideración por nosotros! No conozco el proyecto más que por la lectura que ha hecho el señor secretario; es la primera vez que lo he oído leer y ni siquiera se nos quiere conceder el tiempo necesario para meditarlo un poco.

Esta es la situación que le presento al señor diputado.

Sr. Vivanco (P.)—Yo debo manifestar al señor diputado todo mi asombro por la preparación que ha revelado al tratar este asunto.

Sr. Balestra—Absolutamente; no he tocado la cuestión legal.

Sr. Vivanco (P.)—¡Es la modestia del señor diputado! Para mí ha tratado el asunto con perfecto conocimiento de él.

Sr. Balestra—Le agradezco el elogio; pero lo creo innecesario.

Sr. Vivanco (P.)—Puede agradecerlo porque es muy sincero. Me parece que con estas ligeras observaciones que he hecho, dejo probada la rectitud del voto que voy á dar y la conformidad de mi conducta con las prescripciones bien entendidas de la constitución nacional.

Sr. Varela Ortiz—Pido la palabra.

Creo, señor presidente, que ya es el momento de dejar un poco de lado la cuestión social, que nada tiene que hacer en este recinto esta noche, convocada como está la honorable cámara para pronunciarse sobre un punto concreto de legislación extraordinariamente traído á su seno por el poder ejecutivo.

Me parece además que es llegado el momento de que nos apartemos, un poco también, siquiera, de esta distinción, más innecesaria que otra cosa, que algunos señores diputados han pretendido establecer, entre los extranjeros que vienen á poblar y á trabajar el suelo de la República, atraídos por sus frutos fecundos y la liberalidad de sus instituciones, y los que llegan á nuestras playas, si no ya con la marca que el presidio europeo les ha puesto sobre su cuerpo, con la sentencia que les condena á vivir errantes, lejos de su patria. Y para que nos apartemos definitivamente es necesario que miremos de cerca el interés propio, que se extiende desde el río de la Plata hasta la provincia de Tucumán, interrumpiendo aquí con un levantamiento público las salidas que tienen al mar todos los productos del trabajo fecundo, y allá el fragor de las fábricas, también por levantamientos populares! (*¡Muy bien!*) Una vez mirado el interés propio, vengamos al punto que motiva la discusión del proyecto cuya sanción solicita el poder ejecutivo, para detener el peligro, la amenaza, sería amenaza, que el interés propio económico y social sufre en el momento presente.

Ese proyecto nada tiene que hacer con las huelgas. Las huelgas son un fenómeno de la sociedad moderna, que tienen planteado ante la legislación universal el problema más serio, más trascendental, más múltiple y más interesante que en los últimos momentos del siglo pasado y en los primeros del que se ha iniciado, haya preocupado el pensamiento y la ciencia de los hombres de gobierno.

Tan no pretende el proyecto del poder ejecutivo inmiscuirse en las múltiples cuestiones que las huelgas comportan, y para las cuales se requiere una extensa legislación especial, que la honorable cámara así lo ha escuchado de labios del mismo señor ministro del interior.

Entonces este proyecto ¿á qué viene? ¿que propósito lo ha traído?, ¿cuál es su filiación? Bastará rastrearle su origen.

Nació hace dos años, cuando no había ni el menor indicio de la agitación actual: era una materia de legislación ordinaria que, en mi concepto, encuadra perfectamente bien dentro de los principios constitucionales que nos rigen, pero que en caso alguno, en el momento presente,

podría motivar una deliberación llevada á la Cámara, violenta, y sobre todo impresionada por una acción externa

que se le atribuye, cual es el levantamiento popular notorio y efectivo.

Yo, que en otra oportunidad, estudiando con detenimiento esta ley, le daría posiblemente con toda conciencia y hasta con placer mi voto, se lo he de negar en el momento presente, bastándome para ello que yo personalmente no haya dispuesto del tiempo necesario para estudiarla en los inconvenientes constitucionales que puede ocasionar; para estudiarla en todas sus fases, con relación á la población extranjera del país; para considerarla con relación á las familias obreras establecidas entre nosotros, algunos de cuyos jefes pueden ser propagandistas é iniciadores de huelgas, todo lo que se quiera, pero que pueden ser á la vez padres de numerosa familia, formada en nuestro suelo; padres de hijos argentinos, á los cuales no se les puede excluir sin inferir agravio directo á la sociedad de que forman parte y á la que se hallan incorporados.

En mi concepto, la cuestión del momento presente no se estudia en su sencillez reducida. ¿De qué se trata? ¿De una huelga? Si tuviera los caracteres generales que en el concepto científico moderno se da á estos movimientos de defensa de los obreros contra el capital, no habría cuestión, señor presidente. Hace muy poco—y se citaba como un ejemplo—han desfilado por las calles de Holanda, durante tres días, procesiones de cincuenta mil ciudadanos, levantados en huelga, haciendo una protesta silenciosa de su derecho contra las resistencias del capital; y es perfectamente tolerado en Holanda como en todas las naciones de la tierra, este movimiento que consagra un derecho.

Pero es que en la República Argentina, en estos momentos, el uso de ese derecho no se ha detenido donde comienza el derecho ajeno; y la huelga ha dejado de ser tal para convertirse en un levantamiento público, con todos los caracteres subversivos del motín que no tiene simple y sencillamente el carácter propio de las reuniones huelguistas.

Nó, señor presidente: en la columna alzada contra el derecho de los demás, que lo mismo asalta fábricas que ataja vehículos en las calles, hay una mezcla uniforme de todos los elementos nocivos que fermentan en el seno social. ¿Son acaso todos extranjeros? ¿Los propagandistas, los que los fomentan, vienen de Europa perseguidos por delincuencia? ¿Vienen de Europa ya condenados?

Señor presidente: el gobierno de la Federación obrera está actualmente en manos de ciudadanos argentinos! La mayoría del directorio de la federación obrera la forman hombres nacidos en el país, y los que no son ciudadanos nativos son ciudadanos por naturalización.

Esta ley, si es que se trae como una panacea curativa que haga desaparecer el peligro que en el día amenaza á las industrias, al trabajo, á las sementeras y á la exportación, ¿dará resultados? ¡Absolutamente nó! Sólo serviría, en definitiva, para tomar el señor Rondani,—destacado de los gremios extranjeros, para exasperar un poco, si el señor ministro quiere, los gremios obreros argentinos,—é invitarle á ponerse fuera de la frontera; pero no curará absolutamente el peligro del momento, ni evitará que continúe el levantamiento! Y entonces ¿qué es lo que hace falta? ¿El estado de sitio?

Soy por principio contrario á medidas de ese carácter, extraordinarias, aunque nó por cuanto confieran quizá algo como la suma del poder público al jefe del poder ejecutivo, puesto que en otras ocasiones, es exacto, como el señor ministro lo ha dicho, estas facultades han sido discrecionalmente empleadas por el presidente de la República y sería de suponer que en el caso ocurrente las emplearía también con la discreción, prudencia y cautela que su propia situación le aconsejase; y en este caso creo que lo que hace falta es simple y sencillamente el ejercicio de la autoridad pública, todavía no ensayada, cuando, en mi concepto, es lo elemental, lo primero que ha debido ensayarse. La autoridad se ejercita cuando hay un movimiento político que se levanta en armas y asalta casas ó mata ciudadanos en las calles. ¿En qué forma? Reprimiendo el levantamiento! Y yo no sé por qué la autoridad pública en la capital no haya todavía hecho lo mismo con los representantes de los gremios obreros, cuando fácilmente le habría sido posible, en mi concepto, destruir al nacer el movimiento ya propagado, y que quizá con las solas fuerzas de que en la capital se dispone sea difícil contenerlo. ¡Pero antes que todo hay que ejercitar la autoridad, la fuerza que emerge de la autoridad, la autoridad que significa tutela de todos los derechos y represión de aquel derecho que se levanta por sobre los demás y no se detiene en el límite en que comienza el derecho de otro! Una vez que

esto se haya hecho, si no fuera bastante, sería recién la oportunidad del caso de salud pública, es decir, de salvación social, que la constitución prevé, para dictar las medidas extraordinarias del estado de sitio. No habiéndose hecho esto, creo que el estado de sitio es inútil, y no le he de dar mi voto, como no se lo daré tampoco á la ley de extrañamiento, porque la creo inocua, ineficaz y poco práctica para contener el levantamiento popular actual!

He dicho.

Sr. Lacasa—Pido la palabra.

Las razones que he dado á la cámara para oponerme á que el asunto se tratara sobre tablas, han sido corroboradas por las que han expuesto los señores diputados que me han precedido.

Cuanto más analizo esta ley, más me doy cuenta de que es inoportuna é ineficaz. Considero que cuando mañana el pueblo todo de la República conozca la sesión de esta noche,—cuando todos los gremios y todos los interesados y afectados por la huelga se aperciban de que la cámara se reunió sin tomar medida alguna, tendiente á salvar la situación actual,—se dirá que no se ha procedido como corresponde á la gravedad de los sucesos.

No es posible que los poderes públicos se crucen de brazos en presencia de una situación tan seria y que ha sido perfectamente pintada por varios de los señores diputados que han usado de la palabra. No es posible que la acción de los poderes públicos se contraiga exclusivamente al ejercicio de la fuerza; con eso no se corrige ningún mal.

Yo creo, entonces, que es necesario que los poderes públicos imiten, en esta circunstancia, la acción y el ejemplo de los eminentes hombres de estado de otros países, como Francia é Italia y Estados Unidos, tratando de ver de cerca el origen de estos sucesos, estudiando seria y detenidamente estos fenómenos sociológicos.

Es imposible conocer de tan lejos estos males: es necesario acercarse á esos hombres, que pueden ser quince, veinte ó cincuenta mil, oírlos, y entonces, tratar de buscar el medio de conjurar esta gravísima situación.

Nada se remedia con castigar cuatro-cinco ó seis personas; y cuando esos hombres se levantan con un clamor de protesta es menester escuchar con interés sus reclamaciones, conocer perfectamente sus derechos y la fuerza defensiva de sus posiciones.

Y no se crea, señor presidente, por más esfuerzos que se hagan, que por este medio hemos de destruir y arrancar sus ideas, inspirándoles y haciéndoles comprender otras y otra doctrina, puesto que las ideas y las doctrinas sólo triunfan cuando tienen razón de triunfar y cuando la voz que las proclama tiene un eco hermoso en el fondo del corazón humano, porque allí está el dolor de todos los que sufren. (*¡Muy bien! ¡muy bien!*)

Yo pienso, entonces, señor presidente, que la honorable cámara, poniéndose á la altura de la situación, debería nombrar una comisión con el objeto que he indicado; y si no lo hace, tendré derecho á creer, según mi criterio, que no se da clara cuenta de la verdadera gravedad que esta situación encierra, situación que pone en tela de juicio y que comprende á las industrias, á la inmigración, á los obreros, á la importación, al capital, á la exportación y al comercio, afectando, por consiguiente, los más altos intereses del país. Y, como se ve, con una simple medida de policía como esta no se va á remediar una cuestión tan profunda.

Esta es la razón que tengo para proponer el nombramiento de una comisión que estudie de cerca las causas de estos movimientos y se ponga al habla con las partes contendientes; porque no se puede negar que hay dos tendencias: los que dirigen el capital y los que dirigen el trabajo, y es necesario armonizarlas para que la producción y la prosperidad de la República sean fecundas. Y si no se armonizan, la lucha se va á producir con gravísimo perjuicio para los intereses del país.

Por estas consideraciones, he de votar en contra, creyendo que el proyecto en discusión es ineficaz para remediar la situación actual, que será ineficaz también para el futuro, y que es contrario á los principios, derechos y garantías de la constitución nacional!

Sr. Argerich—Pido la palabra.

Aunque apresuradamente me he enterado del proyecto de ley en discusión quiero dar en pocas palabras la razón de mi voto en su favor.

Todas las exposiciones que acabo de escuchar tienden á demostrar que este proyecto de ley es deficiente; pero ninguna de ellas ha llegado á herir el fundamento y la preceptuación de los tres artículos que él comprende, no encontrando razón alguna que le sea oponible. Que la honorable cámara

de diputados debe sancionar esta ley, sin perjuicio de que después, con mayor detenimiento, pueda complementarla con las medidas que reputé conveniente, á fin de hacer una legislación más acabada para combatir la situación de que se trata (*¡Muy bien!*)

Quería decir simplemente esto.

Sr. Lacasa—Pido la palabra.

Algunos señores diputados me significan el deseo de que insista en mi proposición acerca del nombramiento de una comisión parlamentaria que estudie las causas de la huelga.

Sr. Varela Ortiz—Pido la palabra.

Yo desearía que el señor diputado hiciera una breve exposición acerca del cometido de esta comisión, delegada por la cámara como intermediaria entre los huelguistas y los patronos, y luego encargada de proyectar la legislación obrera en todo su enorme conjunto.

Sr. Lacasa—La misión de esta comisión, dada la precipitación de los sucesos, tiene que ser la siguiente: estudiar la situación actual de los obreros...

Sr. González Bonorino—Pero esa indicación tendría entrada después de votado el proyecto.

Varios señores diputados—Es claro.

Sr. Presidente—Se votará primero el proyecto en discusión, y luego se tomará en cuenta la indicación del señor diputado Lacasa.

—Se aprueba en general y en particular el proyecto.

Sr. Presidente—Queda convertido en ley.

Ahora debe resolver la honorable cámara, de acuerdo con el reglamento, si se trata inmediatamente el proyecto del señor diputado ó si pasa á comisión.

Sr. Carlés—Hago moción en ese sentido.

Sr. Presidente—Sírvase dictar el señor diputado su proyecto.

Sr. Lacasa—Que la honorable cámara nombre una comisión de cinco miembros para que estudie la situación actual de los obreros y proyecte las medidas necesarias para mejorarla.

Sr. Padilla—Pido la palabra.

Si el señor diputado estuviera conforme, propondría la moción siguiente: el nombramiento de una comisión de cinco miembros para que estudie las causas de las huelgas que se han producido en la capital de la República y otros puntos

del territorio nacional, y que proponga los medios de atender las reclamaciones que han dado lugar á ellas.

Sr. Lacasa—Acepto.

Sr. Presidente—Se votará previamente si la cámara se ocupa ó nó inmediatamente de este asunto.

—Se vota, y resulta negativa.

Sr. Presidente—Pasaré, entonces, á comisión.

Queda levantada la sesión.

—Son las 11 y 30 p. m.